



PABLO TEMES

Empadronamiento Inmobiliario, bajo el número 66094/99, en el que se concluyó que ni Rainbow ni Wellon habían pagado jamás las tasas publicitarias.

A esa altura, ambas empresas seguían con la posesión de los carteles y llevaban ocho años sin pagar dichos impuestos. La carga impositiva sería comparable, a precios actuales, a unos \$ 38 por afiche pegado.

Piénsese que una campaña de afiches mínima consta en capital de unos cinco a diez mil afiches que duran sólo algunos días, multiplíquese y multiplíquese y asómbrese.

Los abogados de Pepe, con su mejor cara de ingenuos, dijeron desconocer aquella obligación, aunque los contratos originales que ambas empresas firmaron con Grosso (y que están en poder de PERFIL) dicen enumerativamente que “la concesionaria se hará cargo de los impuestos, tasas y contribuciones municipales o de otro ámbito que recaigan sobre las cosas y/o actividad que dio objeto a la concesión y por el plazo de la misma”. Ambos deudores, Albistur y Avila, eran solidarios, y tan solidarios fueron que ninguno pagó un peso.

El expediente realizó miniturrismo municipal durante algunos años. Mientras tanto, Pepe A siguió pegando carteles. Y nunca le faltó apoyo político para hacerlo: frente a la batalla judicial que le presentaban las otras firmas del mercado que jamás ganaban una licitación, Pepe A decidió crear la Cámara Argentina de Empresas de Publicidad en Vía Pública: y nadie faltó a la cita en el edificio de Cerrito y Córdoba: Aníbal Ibarra (ya intendente, quien también le renovó el contrato), el entonces gobernador Carlos Ruckauf y Juan Carlos Dante Gullo, uno de los operadores políticos y económicos de Pepe A.

El discurso inaugural quedó a cargo de Ibarra y Guillermo De Lella, presidente de la entidad y titular de la fusión Pepe y Carlos A. De Lella fustigó a la globaliza-

ción y planteó que la industria nacional de los carteles necesitaría subsidios proponiéndola como un gran ejemplo de la industria nacional.

Este lunes, Pepe A sabrá que el más voluminoso de sus medios de vida sufrió un traspie judicial

Hay que defender la industria argentina –le dijo a la prensa el día siguiente, en las oficinas de su empresa Wall Street, un nombre que algunos juzgarían desafortunado a la hora de combinar con el discurso.

Finalmente, con el número 55579/2000, el expediente viajero llegó a la Mesa de Entradas y desde ahí se derivó a Rentas, cuyo director general es Alejandro Otero, quien el viernes a la tarde, ante nuestra consulta, tartamudeaba más que un testigo iraní arrepentido. No supo explicar el itinerario del expediente durante los últimos cinco años pero brindó una primicia inesperada:

—El lunes van a tener novedades.

Y no dijo nada más, protegiéndose en un teórico secreto fiscal.

Habrà que esperar algunas horas para saber si los eternos ganadores de las licitaciones de carteles, Pepe A y Carlos A, pagaron esta altísima suma de impuestos adeudados (actualizada debe rondar los ocho millones de dólares) y el expediente será papel picado municipal para el año nuevo.

No se sabe aún si le pagaron al Estado, pero hay seguridad de que sí lo hicieron con el Gobierno: las dos empresas, Wall Street y Rainbow, figuran como aportantes a la campaña presidencial de K, con trescientos mil pesos cada una. ■